

# REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

**AÑO XXXVII — ABRIL - SEPTIEMBRE 1969 — Nº: 148 - 149**

**DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ**

## **CONSEJO CONSULTIVO:**

MANUEL SANHUEZA CRUZ  
CARLOS PECCHI CROCE  
PABLO SAAVEDRA BELMAR  
RENATO GUZMAN SERANI

**IMPRENTA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (CHILE)**

**CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION**

**CONTRA MARIO CESAR COHEN SABANDO Y OTRO**

**INFRACCION AL TRANSITO, DAÑOS EN CHOQUE Y LESIONES.**

**Apelación de la Sentencia definitiva.**

**VELOCIDAD PRUDENTE — TABLA DE FRENAJE — RIESGOS PRESENTES Y POSIBLES — CONDICIONES MECANICAS DE FRENOS — DISTANCIA RAZONABLE ENTRE VEHICULOS — TACHA DE TESTIGOS — MONTO DE LOS DAÑOS — CASO FORTUITO E IMPREVISIBLE — DEBIDA DILIGENCIA — APRECIACION DE LA PRUEBA EN CONCIENCIA — FUNDAMENTO DE DERECHO — RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO — ROTURA DE FRENOS COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD — PRUEBA DEL CASO FORTUITO — INFORME PERICIAL — INSTRUMENTOS PRIVADOS — DESVALORIZACION MONETARIA — COMPENSACION DE DESVALORIZACION MONETARIA — DAÑOS EFECTIVOS — INVALIDACION DE OFICIO DE LA SENTENCIA APELADA — RECLAMACION OPORTUNA — PRESUNCIONES JUDICIALES — RECURSO DE QUEJA.**

*Doctrina.— La rotura de frenos, como posible causa de un choque de automóviles, no es causal eximente de la responsabilidad alegada si el conductor no manejaba a una velocidad prudente, no tuvo presente los riesgos posibles, no mantuvo una distancia razonable y no se acreditó que la rotura fue fortuita, sino que pudo ser consecuencia del mal estado en que se encontraban los frenos,*

*o de haber sido accionados en forma demasiado brusca ante la inminencia del accidente.*

*Las presunciones judiciales basadas en declaraciones de testigos e instrumentos privados son suficientes para que, mediante la apreciación en conciencia de la prueba rendida, se pueda establecer la culpabilidad de un accidente del tránsito y el monto de los perjuicios.*

*Resulta justificada la petición del demandante de que la indemnización comprenda una compensación por la demora en el pago de la indemnización adeudada y la disminución del poder adquisitivo del signo monetario.*

*No procede invalidar de oficio la sentencia apelada basándose en que no se llevaron a efecto diligencias probatorias solicitadas por la parte interesada, si tales diligencias no inciden en forma importante en la resolución del proceso ni se reclamó oportunamente de su omisión.*

#### SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Concepción, 8 de Marzo de 1968.

Vistos: (\*)

Con lo relacionado, la apreciación de los antecedentes en conciencia y teniendo presente:

1º) Que el día 25 de Mayo de 1966, alrededor de las 9 horas A.M., el conductor Mario Cohen Sabando mientras guiaba el microbús patente R. I. 864 por Avenida 21 de

Mayo desde Talcahuano en dirección a esta ciudad, se estrelló contra la citroneta patente R. E. 934 conducida por Rigoberto Campos Sanhueza, quien a su vez impactó al camión patente R. G. 968 guiado por Jose Vera Grandón, estrellándose éste a su vez contra la camioneta patente R. O. 408, conducida por Juan Contreras Morales, la que se estrelló finalmente contra la parte trasera del microbús patente R. X. 886 conducido por Salvador Lamas Facuse;

2º) Que los cuatro vehículos que precedían al microbús guiado por Mario Cohen Sabando se encontraban detenidos cuando recibieron el impacto de aquél;

3º) Que el conductor Cohen Sabando atribuyó el accidente referido a que se le cortaron los frenos de la máquina que conducía;

4º) Que con la prueba rendida en autos por el demandado Mario Cohen Sabando no se demuestra en forma categórica la existencia de la causal eximente de responsabilidad alegada por éste;

5º) Que, muy por el contrario, el estudio de los antecedentes del

(\*) Se ha omitido la publicación de la parte expositiva de este fallo, por no estimarse necesaria para la debida comprensión del asunto a que él se refiere y por estar, en lo fundamental, reiterada en los considerandos de la sentencia. **Nota de la Redacción.**

**DAÑOS EN CHOQUE**

91

proceso, apreciados ellos en conciencia, permite concluir que aun cuando no hubiese ocurrido la "cortadura de frenos" a que alude Cohen Sabando, de todos modos se habría producido el accidente denunciado;

6º) Que la conclusión anterior se desprende de la propia confesión de Cohen Sabando, en la declaración de fojas setenta y siete y en su declaración indagatoria prestada a fojas tres, las que permiten sostener que éste no llevaba una velocidad ni razonable ni prudente que le permitiera controlar su vehículo cuando hubiese sido necesario para evitar accidentes que atenten contra la seguridad de las personas, de sus bienes o de las cosas, conforme lo dispone el artículo 215 de la Ordenanza General del Tránsito;

7º) Que, en efecto, Cohen Sabando manifiesta en sus declaraciones referidas que iba a una distancia de 15 a 20 metros respecto de la citroneta guiada por Rigoberto Campos Sanhueza, distancia que, de aplicar las tablas de frenaje publicadas por el Bureau of Public Road de Estados Unidos de Norteamérica y de aceptar como cierta la velocidad de 40 KLMH, también confesada por Cohen Sabando, tampoco habría podido detener a tiempo su vehículo y evitar el accidente;

8º) Que, atendidos los efectos del choque, que causó cuantiosos daños a 4 vehículos detenidos, dos de los cuales son de peso considerable —Bus Vía Sur y camión—, no puede aceptarse como cierta la velocidad que llevaba en el momento del accidente el microbús guiado por Cohen Sabando, la que puede ser estimada prudencialmente por el Tribunal en unos 65 KLMH;

9º) Que, de aplicar la misma tabla de frenaje del Bureau of Public Road en tal caso, la distancia de frenaje no podía ser inferior a 50 metros;

10º) Que, aceptada la conclusión anterior, la velocidad que llevaba Mario Cohen Sabando no podría estimarse ni razonable ni prudente bajo las condiciones existentes y no tuvo en cuenta el conductor referido los riesgos presentes y los posibles que se podrían desprender de dicha velocidad, atendido el número de vehículos que le precedían, lo que hacía imposible e muy difícil un adelantamiento en caso de ocurrir una emergencia como la que se produjo;

11º) Que los presupuestos de los considerandos 8º y 9º precedentes suponen que el vehículo en cuestión se encuentre en buenas condiciones mecánicas de frenos y de neumáticos y se desplace en pavimento de concreto con cemento,

distancia de detención de 50 metros que en la especie aumenta considerablemente a causa de que el pavimento estaba mojado y resbaladizo según la propia confesión de Cohen Sabando;

12º) Que la no existencia de huella alguna de frenada, también hace concluir que el sistema de frenos del vehículo de Cohen Sabando no se encontraba en buenas condiciones, ya que, de haber accionado regularmente el sistema de frenos, necesariamente debió haber dejado alguna demostración de frenaje, lo que no se apreció en parte alguna de la vía en que se protagonizaron los hechos de autos;

13º) Que lo dicho precedentemente, hace concluir que el sistema de frenos ya se encontraba en malas condiciones de funcionamiento cuando intentó frenar;

14º) Que no se encuentra acreditado en autos que el conductor Cohen Sabando haya accionado el freno de manos para evitar el accidente, lo que no dice el testigo que depone a fojas cuarenta y uno y que lo acompañaba en el interior del microbús cuando ocurrió el hecho denunciado;

15º) Que, ante una emergencia como la que le ocurrió a Cohen Sabando, lo procedente era "enganchar" la máquina, maniobra

que todo buen conductor efectúa en tales circunstancias;

16º) Que el sistema de frenos de mano es totalmente independiente del freno de pedal, de tal suerte que el deterioro del uno no debe afectar al otro;

17º) Que, por otra parte, si se admitiera que los frenos se cortaron en el momento del accidente, ello bien pudo deberse al exceso de velocidad que el conductor le había impreso a su vehículo, velocidad que, en todo caso, de utilizarse el sistema de frenos era previsible que al accionarlos violentamente podría producirse un lógico deterioro de éstos, con las consecuencias que a un conductor diligente no se le pueden escapar;

18º) Que, por otra parte, el conductor Cohen Sabando, según su propia confesión prestada a fojas 76 vuelta, expresa que venía a una distancia de 10 metros de la citoneta y a 30 KLMH;

19º) Que, de aceptar la declaración precedente, el conductor Cohen Sabando venía violando la disposición contenida en el artículo 198 de la Ordenanza General del Tránsito en cuanto establece que los vehículos deben llevar una distancia razonable respecto del que los precede en la vía, distancia que, en la especie y conforme a los estudios generalmente aceptados en

**DAÑOS EN CHOQUE**

97

materia de tránsito, debía ser de no menos de 15 metros;

20º) Que, por otra parte, en su declaración de fojas 77 pregunta 26, el conductor Mario Cohen Sabando manifestó que los frenos de su máquina estaban mojados porque el día del choque estaba lloviendo;

21º) Que la circunstancia anterior agrega un factor más de imprudencia al actuar de Mario Cohen Sabando, ya que si conocía dicha circunstancia debió haber extremado las medidas de prudencia;

22º) Que además, es a todas luces manifiesto que Cohen Sabando no llevaba una velocidad reducida al llegar al cruce de 21 de Mayo y Argomedo, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 216 inciso 3º de la Ordenanza General del Tránsito;

23º) Que, Erlfried Schmidt Wetzel, dueño de la camioneta conducida por Rigoberto Campos Samhuesa, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Mario Cohen Sabando, conductor del microbús patente R. I. 864 y de Mario Piña Sepúlveda, dueño del referido vehículo, y en el carácter de solidariamente responsables de los daños causados;

24º) Que no procede dar lugar a la tacha opuesta a fojas cuarenta y dos en contra del testigo Sergio

Ambiado Villar por haber sido opuesta extemporáneamente y sin perjuicio de tener presente sus fundamentos al apreciar en conciencia la prueba producida;

25º) Que, de los antecedentes producidos en la causa, se desprende que los daños sufridos por el vehículo de Erlfried Schmidt Wetzel no pueden ser inferiores a E\$ 13.000 ni superiores a E\$ 15.000;

26º) Que, a fojas veinticuatro, la parte de José Vera Grandón solicitó reserva de acciones civiles para ante el Tribunal ordinario que corresponda;

27º) Que, para la existencia del caso fortuito e imprevisible, determinante de la circunstancia eximente de responsabilidad que dicha precepto sustantivo admite, es necesario que el acto lícito de que se trata se haya ejecutado con la debida diligencia, sin la más leve culpa ni intención, habiéndose producido el mal en las personas o daño en las cosas por mero accidente y que en ningún caso haya habido de parte del agente infracción reglamentaria a los preceptos del tránsito público, como ocurre en el hecho de autos;

28º) Que existe precisa relación de causa a efecto entre las infracciones anotadas y el daño causado por el accidente;

29º) Que, los antecedentes relacionados son constitutivos de presunciones judiciales, las que, apreciadas en conciencia, permiten considerar culpable de manejo descuidado al referido conductor Mario Cohen Sabando y responsable de los daños sufridos por los dueños de los cuatro vehículos que lo antecedían en la vía;

30º) Que procede absolver de toda responsabilidad en el accidente a Rigoberto Campos Sanhueza, José Vera Grandón, Juan Contreras Morales y Salvador Lamas Facuse;

Y teniendo, además, presente lo dispuesto en las artículos 1º, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 67, 68, 72 de la Ley 15.231 y la apreciación de los antecedentes referidos en conciencia, se declara:

1º.— Que ha lugar a la denuncia de fojas 1 y querrela de fojas 19 y que, en consecuencia, se condena a Mario Cohen Sabando, ya individualizado, al pago de una multa de E° 600,00 más los recargos legales, como culpable de manejo descuidado, al no llevar una velocidad razonable y prudente en relación con las circunstancias de tránsito del momento, transitar con los frenos de su vehículo en condiciones deficientes, causando daños en choque a cuatro vehículos detenidos e infringiendo con ello

lo dispuesto en los artículos 83, 215, 216 y 236 N°s. 2º, 4º, 6º y 17º de la Ordenanza General del Tránsito.

Si no pagare la multa dentro del plazo de cinco días de notificada la presente sentencia, sufrirá por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada cincuenta centésimos de escudo de multa, los que se contarán desde que ingrese al establecimiento penal correspondiente;

2º.— Que no ha lugar a la tacha opuesta al testigo Sergio Ambiado Villar;

3º.— Que ha lugar a la demanda civil de fojas 17 y que, en consecuencia, se regulan prudencialmente los daños sufridos por Erlfried Schmidt Wetzel en la cantidad de E° 14.500,00 y se condena solidariamente a su pago a Mario Cohen Sabando y a Mario Piña Sepúlveda, ya individualizados;

4º.— Que se absuelve de responsabilidad en el accidente a Rigoberto Campos Sanhueza, José Vera Grandón, Juan Contreras Morales y Salvador Lamas Facuse;

5º.— Que se le concede a José Vera Grandón la reserva de acciones civiles para ante el Tribunal ordinario que corresponda;

6º.— Que se regulan los honorarios del perito en la suma de E° 300,00;;

**DAÑOS EN CHOQUE**

99

7º.— Que se condena en costas a la parte vencida;

8º.— Que se le aplica como pena accesoria al conductor Mario Cohen Sabando la suspensión de su licencia para conducir vehículos motorizados por un lapso de seis meses.

Francisco Capponi G.

Dictada por el Juez titular del Primer Juzgado de Policía Local, señor Francisco Capponi Galetti. Serapio Matus, Secretario subrogante.

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

Concepción, 26 de Mayo de 1969.

Vistos y teniendo, además, presente:

1º) Que el querellado Mario Piña Sepúlveda dedujo a fojas 127 el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en esta causa, reproduciendo todas las observaciones y alegaciones contenidas en el escrito de fojas 101; y, a su vez, el abogado don Hugo Díaz Uribe, en representación del querellado Mario Cohen Sabando, a fojas 128 adhirió a la apelación e hizo suya en todas sus partes la apelación recién mencionada;

2º) Que en el escrito de fojas 101 el abogado señor Díaz, diciéndose representante de los querellados Cohen y Piña, había apelado de la misma sentencia, fundando el recurso en las alegaciones que se tratan en los considerandos siguientes;

3º) Que el primer capítulo en el que los apelantes Cohen y Piña fundamentan el recurso consiste en que el querellante Erlfried Schmidt, al demandar a Mario Piña Sepúlveda, no habría especificado por qué éste sería responsable de los perjuicios que sufrió con el accidente del tránsito de que tratan estos autos; no menciona el vínculo contractual que pueda existir entre ambos querellados y se limita a citar una serie de disposiciones legales de las cuales no todas dicen relación con el problema planteado. Tampoco el querellante habría probado en el proceso la existencia de vínculo contractual alguno entre los demandados, y agrega que las citas legales serían insuficientes para llenar este vacío.

A lo dicho cabe observar que si bien algunas de las disposiciones legales que se citan en la demanda de fojas 16 no son conducentes a establecer la responsabilidad que en los hechos de esta causa pueda afectar al demandado Mario Piña,

otras tienen importante incidencia en la materia, principalmente el artículo 68 de la Ley 15.231, Orgánica de los Juzgados de Policía Local, que a la letra dice: "De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. Sin perjuicio de la responsabilidad de otras personas en conformidad al derecho común, será responsable solidariamente con el conductor, del pago de los daños y perjuicios causados, el propietario del vehículo, a menos que pruebe que le ha sido tomado sin conocimiento o autorización expresa o tácita". Por lo demás en el libelo de demanda se expresa que Mario Cohen es el conductor del vehículo que causó el daño y Mario Piña el empresario que explota dicho vehículo y en tal carácter deben responder de los perjuicios que se cobran.

Ambos demandados, a través de todo el proceso, han reconocido expresa y tácitamente las calidades que en la demanda se les atribuyen, según se desprende de lo declarado por Cohen a fojas 3, del documento agregado por Piña a fojas 22, de la prueba de testigos rendida a fojas 26 y 41 y del pliego de posiciones de fojas 75; y se prueba también con los instrumentos públicos acompañados a fojas 115 y 116 por la parte demandante y a fojas 161 por la demandada;

4º) Que se afirma en seguida, a fojas 101 por los apelantes que en autos se ha probado que el motivo por el cual el microbús conducido por el querellado Cohen embistió en contra de la citroneta del demandante Schmidt consistió en la rotura de los frenos, lo que estaría probado en el proceso y constituye una circunstancia eximente de responsabilidad.

Como se argumenta en el fundamento 4º del fallo en alzada, la posible rotura del sistema de frenos no aparece fehacientemente acreditada en el proceso ni menos que la rotura se haya producido en el momento del choque, ya que el conductor José Vera Grandón en la inspección personal del Tribunal que consta a fojas 29 manifiesta que en seguida del accidente vio manchas de aceite en el pavimento, pero ignora de qué vehículo provenían esas manchas; el testigo César Marcial Machado a fojas 41 declara que cuando el microbús manejado por Cohen, en el cual el testigo viajaba, se acercaba a la caravana de vehículos detenidos, notó que los frenos del micro se habían cortado. Pero es de hacer notar que el testigo es estudiante universitario y no hay antecedentes en autos para suponer que tenga algún conocimiento técnico que lo habilite para percatarse de una falla mecánica como la que dice

**DAÑOS EN CHOQUE**

**101**

haber notado en el vehículo; y además, de que es amigo del conductor Cohen, quien, según el testigo, lo había invitado a que lo acompañara a hacer el recorrido hasta el Colegio de Los Sagrados Corazones. En cuanto al testigo Sergio Ambiado Villar, que a fojas 42 declara que, trasladado al lugar del accidente, comprobó que los frenos del microbús se habían cortado, debe hacerse notar que este testigo es obrero y dependiente del demandado Mario Piña según lo reconoce al prestar su declaración. El testigo Gabriel Hermosilla Pinto, que se acercó hasta el sitio del accidente conduciendo un furgón de Carabineros, declara a fojas 40 vuelta que constató que los frenos del microbús se encontraban rotos en el tambor del costado izquierdo trasero, pero a continuación agrega que no puede precisar si el tambor se dañó por haberse encontrado en malas condiciones o debido a una frenada brusca de la máquina.

Y aún en el supuesto de que con las testificaciones resumidas pudiera tenerse por acreditado que la causa del accidente se debió, efectivamente, a la rotura de los frenos, ello no sería suficiente para tener también por acreditado el caso fortuito que daría origen a una eximente de responsabilidad, porque, como manifiesta Gabriel Hermosilla,

testigo calificado debido a que, como conductor de un furgón de Carabineros, debe suponerse que posee experiencia y conocimientos técnicos en la materia, los frenos pudieron haberse roto porque se encontraban en mal estado o porque fueron accionados en forma demasiado brusca ante la inminencia del accidente, lo que no habría ocurrido si hubiese transitado a poca velocidad y hubiera aplicado los frenos en forma más oportuna y con la debida prudencia;

5º) Se sostiene además por parte de los querellados que la velocidad que el microbús llevaba no era excesiva, lo que no sería posible ya que yendo este vehículo en una caravana, no podría transitar a mayor velocidad que los demás; y que la distancia a que viajaba el microbús con relación a la camioneta chocada era de unos cien metros.

Sobre este particular debe considerarse que el sólo hecho de transitar en caravana no significa que todos los vehículos viajen en un momento dado a la misma velocidad, lo que es más evidente dentro de las ciudades en que a cada instante hay que cambiar de velocidad, ya sea para facilitar el paso de otros vehículos o cuando, como ocurre en la población Lorenzo Arenas por donde los vehículos acababan de pasar, las luces

señalizadoras del tránsito los obligaban a detenerse. Así ocurre que la circunstancia de transitar en caravana no significa que los vehículos viajen permanentemente a determinada distancia unos de otros ni que la velocidad de todos ellos sea uniforme ni tampoco que obligadamente deban todos transitar a poca velocidad.

6º) Que también los apelantes Cohen y Piña se alzaron respecto del monto de los perjuicios que la sentencia de primera instancia ordena pagar al demandante, sosteniendo que no existe en el proceso prueba alguna para demostrar lo que, como indemnización de perjuicios, se cobra en la demanda.

Que al respecto el informe pericial de fojas 84 sostiene que la reparación total de la citroneta tendría un costo superior al de una citroneta nueva cuyo precio fluctúa entre E° 14.000.— y E° 15.000.—, de lo que se desprende que, en concepto del perito, el costo de reparación del referido vehículo sería superior a estas cantidades. Y habiendo el actor estimado el daño en E° 13.500 resulta equitativa la suma fijada en la sentencia.

Por lo demás esta apreciación aparece acorde con las que se indican en los documentos de fojas 88 y 89 que si bien son instrumentos privados que no fueron agregados al proceso con las formalidades que

señala el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, no fueron impugnados en forma alguna por los demandados. Igualmente la referida avaluación aparece corroborada por los testigos Nuncio Lo Porto Turco y Mario Véjar Véjar, quienes estiman el perjuicio en E° 15.000 y E° 12.000, respectivamente, en su comparencia de fojas 40. En relación con estos testigos no cabe aplicar lo dispuesto en el artículo 1710 del Código Civil invocado por los demandados, ya que los testigos hacen una apreciación personal, y no se trata en la especie de la demanda sobre la entrega o promesa de una cosa de más de doscientos pesos a que se refiere la disposición legal citada en relación con los artículos 1703 y 1709 del Código citado.

Por lo dicho, y apreciando en conciencia el conjunto de probanzas relacionado precedentemente, cabe confirmar la sentencia de primera instancia en relación con el punto en estudio;

7º) Que en su demanda el actor señor Schmidt cobró indemnización del daño que el accidente del tránsito le causó, consistente en la destrucción de su vehículo, la suma de E° 13.500.—, más la suma que corresponda por la desvalorización monetaria operada desde la fecha del cuasidelito hasta la del pago de la indemnización. Estas peticio-

**DAÑOS EN CHOQUE**

**103**

nes fueron reiteradas por el actor al adherir a la apelación, a fojas 142;

8º) Que en cuanto al monto básico del daño, esto es, al valor que los daños causados tenían al tiempo de ocurrir el accidente como ya se dijo, la sentencia de primera instancia debe ser confirmada en cuanto fija este valor en la suma de E° 13.500.

Respecto de lo que se cobra por concepto de la desvalorización monetaria, tal petición no aparece amparada por alguna disposición legal que la justifique.

Sin embargo, no puede desconocerse la evidencia de que la desvalorización monetaria es un hecho cierto, y son evidentes también los perjuicios injustificados que este fenómeno causa a la mayoría de las personas, como tampoco puede negarse el beneficio que acarrea a otras.

Ante esta situación, en virtud de la autonomía de la voluntad, es frecuente que las personas en sus contratos eludan fijar precios con pago diferido en moneda corriente, y lo hagan en cosas, productos o mercaderías que de ordinario no están afectos a desvalorización. El mismo es el fundamento de los contratos en que se fijan precios o cánones en base al sueldo vital de los empleados particulares, o se recargan con porcentajes que com-

pensen la desvalorización de nuestra moneda; y todos estos sistemas en que no se contrata ni se paga en base a moneda legal de curso forzoso son expresa o tácitamente aceptados por la autoridad.

Siendo así, resulta por demás justificada la petición del demandante en orden a que se le abone lo que corresponde de acuerdo a la disminución del poder adquisitivo de nuestro signo monetario, porque es atinado tratar de que la indemnización efectivamente elimine el daño causado, lo que no se lograría si se dispusiere únicamente el pago de valores, que, como en la especie, se han fijado con gran antelación; debiendo, sin embargo, limitarse al aumento por desvalorización monetaria a la fecha de la sentencia de término, ya que cualquier aumento posterior a ella atentaría a la institución de la cosa juzgada;

9º) Que a fojas 120 se solicitó al Tribunal de segunda instancia, en nombre de los querellados Mario Cohen y Mario Piña, se invalidara de oficio la sentencia apelada, en base a que no se llevaron a efecto las diligencias probatorias solicitadas por la misma parte a fojas 26;

10º) Que aun cuando, como esta Corte declaró a fojas 121, el abogado que formuló la referida petición en nombre los demandados no los re-

presentaba legalmente, los falladores estiman conveniente hacerse cargo de lo que en el referido escrito se asevera;

11º) Que, efectivamente, a fojas 26 se pidió por la querellada se oficiara al Departamento del Tránsito de la Municipalidad de Concepción y a la Compañía de Acero del Pacífico, solicitándoles informe al tenor de la aludida petición.

A fojas 161 aparece agregado un certificado de la Dirección del Tránsito en que se deja constancia de los hechos que interesaban a los querellados, consistente en que el 28 de Abril de 1966 se otorgó patente al microbús de propiedad de Mario Piña Sepúlveda, para cuyo objeto se presentó por el interesado un certificado de encontrarse en buen estado los frenos y otros mecanismos del vehículo, con lo que aparece salvada la omisión en esta parte.

En cuanto al informe solicitado a la Compañía de Acero del Pacífico, efectivamente no aparece en autos que se haya oficiado a dicha empresa ni que ella haya informado al tenor de lo solicitado;

12º) Que los certificados a que se hace referencia fueron solicitados por la parte querellada con miras a demostrar que el microbús había sido sometido a revisión de frenos poco antes de ocurrir el

accidente, por cuyo motivo ellos no inciden en forma importante en la resolución de este proceso. En efecto, ya se argumentó en el fundamento 4º de este fallo que, aun de ser efectivo que la causa del accidente fue la rotura del freno, ello no es suficiente para acreditar el caso fortuito en que los demandados fundamentan su defensa;

13º) Que, por lo demás, los querellados no reclamaron oportunamente ni ejercieron los recursos legales para que la diligencia que resultó cumplida sólo en parte se llevara a efecto en su integridad, y sólo después de la sentencia, encontrándose ya los autos en esta Corte, se planteó la posibilidad de una casación de oficio;

14º) Que con posterioridad a la dictación de la sentencia de primera instancia fueron agregados por la parte querellante los documentos enrolados entre las fojas 146 a 149. El de fojas 146 es un certificado del Inspector Provincial de la Dirección de Estadísticas y Censos que se refiere a la variación del índice de precios al consumidor entre Mayo de 1966 y Noviembre de 1968, cuyo porcentaje alcanza al 65,57%, y corrobora lo dicho en este fallo en relación con la merma del valor adquisitivo de nuestro signo monetario; el de fojas 147 a) complementado por el de fojas 148 contri-

buye también a acreditar el mismo fenómeno en base al aumento de las tarifas que la locomoción colectiva ha experimentado desde Febrero de 1966 a Enero de 1968 en la Provincia de Concepción; el de fojas 147 es un certificado de la firma Bernardo Esquerré, distribuidora de vehículos "Citroen", en que se expresa que en Mayo de 1966 el precio oficial de una citroneta era de E° 15.688 y que a la fecha del certificado (16 de Enero de 1969) era de E° 27.860.—, y demuestra el aumento de precio que han tenido estos vehículos.

Todos estos documentos concurren a justificar el cobro que el demandante hace en razón de la desvalorización monetaria.

En cuanto al documento de fojas 149, se refiere a las remuneraciones que el actor percibió de su empleador, el Banco Osorno y La Unión, en el año de 1968, que carece de mayor relevancia en la decisión de esta controversia;

15º) Que, por su parte, la querellada acompañó al juicio, también después de dictada la sentencia, los documentos que rolan desde fojas 157 a fojas 160.

Los dos primeros son documentos emanados de firmas que comercian en vehículos motorizados que afirman que el valor actual de las citronetas del año 1964 es de E° 15.000; el de fojas 159 acredita que la evaluación oficial actual del mismo vehículo, fiada por Decreto Supremo, es de E° 14.500, y el de fojas 160, que el valor oficial del mismo vehículo era en 1966 de E° 9.000.

Este conjunto de instrumentos son otras tantas presunciones judiciales que, apreciadas en conciencia, contribuyen a establecer el monto de la indemnización que debe pagarse al querellante Schmidt.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que disponen los artículos 2314., 2321 inciso 1º y 2329 del Código Civil, 144 del Código de Procedimiento Civil y 529 del de Procedimiento Penal, se confirma la sentencia apelada de 8 de Marzo de 1968, escrita a fojas 92, con declaración de que la suma que, según el fallo en alzada, los querellados Mario Cohen Sabando y Mario Piña Sepúlveda deben pagar como indemnización de perjuicios al querellante Erlfried Schmidt, se aumentará con las cantidades que correspondan a la desvalorización monetaria que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, se haya producido entre la fecha del accidente que originó este proceso y aquella

en que quede ejecutoriada esta sentencia, según liquidación que se efectuará en el cumplimiento de lo fallado.

Redacción del Ministro don Abraham Solís Guíñez.

José Cánovas R. — Tomás Chávez Ch. — Abraham Solís G.

Dictada por los Ministros titulares, señores José Cánovas Robles, Tomás Chávez Chávez y Abraham Solís Guíñez — Ana Espinosa D., Secretaria(\*).

---

(\*) Por resolución pronunciada con fecha 4 de Septiembre del presente año, la Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por los demandados Mario César Cohen Sabando y Mario Piña Sepúlveda en contra de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, de 26 de Mayo último, arriba transcrita. **Nota de la Redacción.**